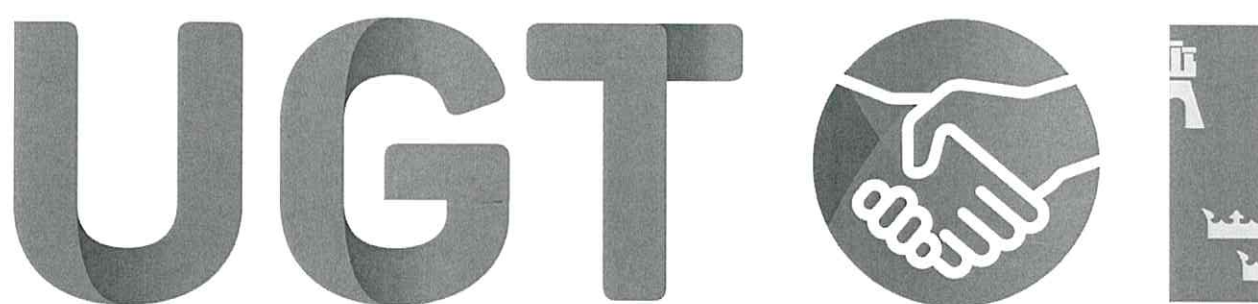


RESUMEN DE PRENSA



Región de Murcia

Vicesecretaría general y Secretaría de Comunicación y
Participación Sindical

Departamento de Comunicación y Redes Sociales

22/04/2024



Lidia Flores, con sus hijos y su marido, se libró del desahucio gracias al apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. ROS CAVAL / AGM

Empresarios en quiebra y empleados pobres son las principales víctimas de los desahucios

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca paraliza este año 7 desalojos frente a los 20 del pasado en Cartagena, Murcia, Lorca y Molina

TANIA COSTA

MURCIA. Empresarios en quiebra, trabajadores pobres y personas vulnerables son los perfiles que más se repiten en la Región asociados a desahucios, bien sea por impago de la letra de la casa o de alquileres. Estos últimos han aumentado en lo que llevamos de año, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha frenado siete desalojos de enero a abril, sobre todo en Molina, Murcia, Lorca y Cartagena, frente a los 20 de todo 2023. El año pasado se contabilizaron más desahucios por impago de alquiler (406) que por no abonar la hipoteca (315).

El perfil menos conocido al ha-

blar de desahucios es el de empresarios que lo perdieron todo. «Eso se cuenta menos. La gente se oculta, siente vergüenza, pero hay bastantes», dice Francisco Morote, de la PAH.

Los números le dan la razón. En este primer trimestre han aumentado en España un 63,64% los concursos. «El total de procedimientos de insolvencia (concursos, planes de reestructuración...), que afectan a empresas, han crecido este año un 83,33% en la Región», apunta Francisco Fuentes Campuzano, secretario del Colegio de Economistas, con datos de Informa. «A nivel empresarial, la subida de costes está siendo tan brutal que se hace difícil mantener los negocios abiertos y eso genera paro y el paro produce impagos», dice.

El último de los desahucios que frenó la PAH es el de María Dolores Espinosa, vecina de Alcantarilla. Ella okupó un piso, propiedad de un fondo buitre, y

Cáritas acompaña a 79 familias expulsadas en los últimos meses

Cáritas ha acompañado en los últimos meses a 79 familias en situación de desahucio, algunos ya ejecutados y otros a la espera. Son personas vulnerables o en riesgo de exclusión, familias monoparentales, en situación administrativa regular, con menores o personas con discapacidad a cargo. Des-

trará que dejarlo el 25 de este mes. El Juzgado número 8 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia no acepta un certificado de vulnerabilidad que le evitaría quedarse en la calle con dos hijos y un nieto de dos años. «¿Adónde me voy? Las inmobiliarias te piden muchas cosas para el alquiler y, sin trabajo, lo tengo superdifícil».

de la pandemia los desalojos se paralizaron un tiempo, pero ya se han reactivado pese al aumento del costo de la vida, la inflación, el empleo precario, el elevado precio del alquiler y los alimentos y la falta de viviendas sociales. En el último año, desde Cáritas Diócesis de Cartagena se dieron unas 6.000 ayudas de vivienda a casi 3.000 familias. Son conscientes de que sin esta subvención, dirigida, sobre todo, al alquiler, habría más desahucios.

Suben los concursos un 223%

El año pasado se presentaron en la Región 1.397 concursos de personas sin actividad empresarial, lo que supuso un 223% más que en 2022. Esta subida se debe, por una parte, a que muchos hipotecados que perdieron su casa, seguían manteniendo deudas con el banco, más allá de la ejecución, y decidieron acogerse a la Ley de

«No tenemos trabajo. Mi marido hace chapuzas y podríamos pagar alquiler social al banco, pero no nos dan esa posibilidad»

Segunda Oportunidad, explica el abogado José María Gómez, experto en el tema.

También lo hicieron pequeños autónomos tras perder su comercio o su bar y afectados por microcréditos y tarjetas 'revolving'.

«El crecimiento fue exponencial. Si el año pasado la subida fue muy importante, este año lo será más porque ahora mismo la gente se libera de verdad y el procedimiento es ágil», añade.

Lidia Flores, con cuatro hijos

Más suerte tuvo en Alcantarilla Lidia Flores, de 29 años y con cuatro hijos, los tres pequeños de 2, 5 y 7 años. Su caso lo llevó el Juzgado 7, que sí aceptó el certificado de vulnerabilidad de los Servicios Sociales. El juez paralizó el desalojo y podrá seguir viviendo en el piso de un banco que okupó hace tres años. «No tenemos trabajo. El Ayuntamiento no tiene viviendas sociales. Mi marido hace chapuzas y estamos dispuestos a pagar un alquiler social al banco, pero no nos dan esa posibilidad».

Al cierre de 2023, el Poder Judicial registró en la Región 941 desahucios recibidos en los Juzgados, frente a los 1.602 de 2022. El descenso es del 41,3%, pero fuentes del TSJ admiten que ese pinchazo no refleja la situación real. La caída se debe a los cinco meses de huelga de secretarios judiciales y funcionarios de Justicia, encargados de las ejecuciones hipotecarias, que terminan en desalojo. En total, se tramitaron el año pasado 315, frente a las 721 de 2022.

Crece las ejecuciones

«Se está notando el incremento de ejecuciones. Vemos la conflictividad laboral y la situación inflacionista, que genera una subida en las cuotas. Se hace inalcanzable para los trabajadores asumir encarecimientos de la hipoteca de 200 y 500 euros mensuales», señala Alfonso Hernández Querreda, decano del Colegio de Graduados Sociales. Él destaca una subida del 20% de la conflictividad en el Juzgado de lo Social por despidos y reclamación de incapacidad, en una Región donde más de 140.000 trabajadores están en la franja del salario mínimo interprofesional (SMI), según CC OO.

Pese a que no bajan los tipos de interés, por los que se rige el euríbor que afecta a las hipotecas variables (están en el 4,5%), los últimos datos de CaixaBank Research indican que un hogar típico de la Región, al cierre de 2023 necesitaba 4,3 años de trabajo para pagar una hipoteca. La media nacional está en 6,8 años.

Perdió el trabajo, agotó el paro y debía priorizar: «el alquiler o comer»

TANIA COSTA

MURCIA. Siempre había tenido una vida normal, hasta que se quedó sin trabajo, se le agotó el paro y el subsidio que le quedó para vivir junto a su hijo menor de edad, no le daba para hacer frente al abono del alquiler. «Debía priorizar o pagar el alquiler o comer».

Durante un año estuvo buscando empleo, pero todos los que encontraba eran precarios. «Me impedían tanto saldar la deuda como hacerle frente al pago mensual. El proceso de desahucio no se ha iniciado por impago, sino que la propietaria reclama la vivienda para uso personal, por lo que no puedo hacer nada».

Ella, que prefiere mantener el anonimato, es española, divorciada y reside en el barrio de Los Dolores, en Cartagena, junto a su hijo pequeño. Gracias a Cáritas ha vuelto a trabajar y ahora se puede pagar una habitación en un piso compartido. «He afrontado el proceso acudiendo a Cáritas e intentando buscar apoyo o solución en los servicios públicos», explica.

Ahora está más tranquila, pero reconoce que ha sido un proceso duro que ha vivido sin una red de apoyo familiar y sin el apoyo de la Administración, pero acompa-

ñada de Cáritas. «Un día, sin previo aviso, se presentaron en mi hogar la abogada de la propietaria de la vivienda y una persona del juzgado para decirme que tenía que abandonar el domicilio en ese momento. En ningún momento, ni mi abogado de oficio ni el juzgado me habían comunicado que se desestimaba el recurso. Hablando con ellas, conseguí que me dieran de margen una semana, pero, por ley, me ha correspondido un mes más, para poder buscar una casa, recoger mis cosas e iniciar una nueva etapa».



Un trabajador de la empresa de calzado Casteller, en pleno proceso de fabricación, en sus instalaciones en Caravaca, el pasado jueves. JUAN F. ROBLES

El sector del calzado afronta una etapa de parálisis tras crecer un 25% en diez años

Esta industria regional manufacturera aborda 2024 como otro ejercicio de «travesía», después del retroceso en el anterior, y se mantiene en 143 firmas

ZENÓN GUILLÉN

MURCIA. Los nuevos nubarrones ensombrecen el brillo del sector del calzado en la Región de Murcia. Una actividad productiva que ha experimentado un importante crecimiento en los últimos diez años, hasta computar la existencia de un total de 143 empresas, lo que supone un 27,7% más que las existentes en 2013. Y, de igual forma, el valor de sus exportaciones, que alcanzan los 105 millones de euros, lo que supone otro incremento superior al 26,3%.

Sin duda, una cifra importante, tal y como recoge el informe anual de 2023 de la Federación del Calzado Español (Fice), donde se refrenda el importante salto dado por este sector manufacturero en la Comunidad, marcado por una larga tradición, pero que tampoco pueden ocultar la realidad del retroceso experimentado en el último año y las difíciles previsiones para este 2024. De modo que se empieza a asumir que esta parálisis traerá otro ejercicio de «travesía» en espera de una reactivación en 2025.

Así lo reconoce a LA VERDAD el secretario general de la Asociación de Industrias del Calzado y Alpargatas de la Región Calzia, Salvador Gómez, que integra a medio centenar de empresas, entre las que destacan las ubicadas en la comarca del Noroeste. «Sufrimos una caída de pedidos por

varios motivos. Por un lado, la indigestión en el mercado con toda la sobreproducción que se acumuló en los años de la pandemia y de la postpandemia; y luego el impacto de los cambios meteorológicos que afectaron negativamente en las últimas temporadas, tanto en las de invierno como las de verano, ya que tanto el frío como el calor llegaron a destiempo».

Hay que tener en cuenta que el tejido regional del calzado se concentra, principalmente, en los municipios de Caravaca de la Cruz, Lorca, Cehegín, Alhama de Murcia, Abanilla y Yecla. Precisamente, en el municipio del Altiplano destaca la presencia de la gran marca de referencia Xti, con un volumen de facturación que ronda los 60 millones de euros. Del total de firmas, un 80% elaboran za-

La asociación Calzia alerta sobre los efectos del tsunami normativo

«Estamos preocupados también por el tsunami normativo que sufren las empresas de los gobiernos de España y de la UE. Cambios como la regulación de trabajadores fijos-discontinuos, el reglamento europeo de morosidad y la mal llamada 'Ley Crea y Crece' condicionan la competitividad», señala el secretario de Calzia, Salvador Gómez. Mientras, el sector busca impulsarse con iniciativas como la próxima edición del Youte Festival en Caravaca, en mayo, que prepara con la Comunidad y el Consistorio.

La caída de pedidos reduce la producción, que provocó ya el pasado año la disminución de un 7,8% en trabajadores cotizantes

patos, zapatillas, deportivas y sandalias. Pero es destacable el producto tradicional de suelas de alpargatas y trenzados de yute. Mientras que el resto del sector se dedica a fabricar componentes, como cueros, suelas, empeines, plantillas, tacones y cuñas de corcho.

El número de trabajadores en la industria del calzado y anexos se sitúa en unos 1.650 ocupados en la Comunidad, según datos de la Seguridad Social al cierre de 2023, lo que supuso un descenso de cotizantes del 7,84% en relación al año anterior. Pero también existe un volumen relevante de actividad dentro de la denominada economía sumergida.

En relación a la evolución más reciente, en términos de producción el sector del calzado enfiló la recuperación a lo largo de 2021 y 2022, tras el parón sufrido con la covid-19, tal como se recoge en el análisis de la patronal nacional, sin embargo en la pasada anualidad se experimentó una caída global de la producción de alrededor del 17% con respecto al ejercicio anterior en España. Una realidad enmarcada en una caída relevante de los pedidos.

Incremento de los costes

«Sufrimos un encarecimiento de los costes en general que nos hace perder competitividad internacional. Cuando nuestras empresas salen fuera, al final tenemos que enfrentarnos con los competidores de Italia, Portugal y Turquía. Por ejemplo, la subida de los costes laborales en España son mayores, sobre todo por las cotizaciones sociales», advierte Gómez.

Es incuestionable, más allá del ámbito regional, que la industria del calzado español ha perdido progresivamente operadores en los últimos años. Según el Directorio Central de Empresas del INE, a 1 de enero de 2022 el sector del calzado sumaba 2.975 sociedades activas en el país, el valor mínimo desde el inicio de la serie estadística, en 2008, cuando se superaron por última vez las 4.000 firmas.

Los ecuatorianos de la Región votan las reformas de Noboa

LA VERDAD

MURCIA. La comunidad ecuatoriana de la Región acudió ayer a votar el referéndum sobre la reforma constitucional planteada por el presidente del país, Daniel Noboa, para endurecer las penas contra el crimen organizado y ampliar los poderes del Estado y

las Fuerzas Armadas en la persecución de la delincuencia.

Más de 29.600 votantes estaban llamados ayer a participar en la Región de Murcia en esta consulta. Para ello, el consulado habilitó centros de votación en Murcia, Cartagena, Lorca y Jumilla. En total, en España, hay 184.470 ecuatorianos residentes con de-

recho a voto. El plebiscito plantea once preguntas, entre las se encuentran la eliminación de los beneficios penitenciarios para determinado tipo de delitos, la elevación de las condenas, la creación de un nuevo delito de tenencia de armas de uso exclusivo para la Policía y el Ejército y la transferencia de las armas incautadas a las bandas para el equipamiento inmediato de las Fuerzas Armadas. El referéndum pone a prueba el apoyo ciudadano al presidente en la guerra desatada contra las mafias de la droga.



Una ciudadana ecuatoriana vota, ayer, en el Víctor Villegas. J. CARRIÓN / AGH



Varios obreros de la empresa Metalmecánicas Herjimar trabajando en diferentes proyectos, en una de las naves que tiene la compañía en el polígono Los Camachos. J. M. RODRIGUEZ / AGM

La empresa auxiliar se carga de trabajo

Asume el montaje de los S-82, S-83 y S-84, la revisión de las unidades de producción de Ilboc, Bunge, y las mejoras en la plataforma petrolífera

ANTONIO LÓPEZ

CARTAGENA. Las empresas auxiliares del sector industrial tienen por delante uno de los años con más carga de trabajo del último lustro. Las paradas de mantenimiento que llevará a cabo la empresa productora de bases lubricantes Ilboc en Escombreras, y la multinacional Bunge Ibérica, también en el Valle, junto a la revisión que acometerá la plataforma petrolífera 'Transocean Barents' y los contratos que Navantía sacará a concurso para el montaje de los motores de las fragatas españolas y seguir con la construcción de los submarinos S-82, S-83 y S-84 supondrán una importante oportunidad de empleo. A ello hay que sumar obras de mantenimiento en Repsol y Sabic y otros trabajos, como el cambio de equipos, construcciones metálicas y montajes de pequeñas dimensiones en otras empresas. Por ello, las llamadas subcontratas ven a Cartagena como un importante foco de trabajo difícil de encontrar en otro lugar de España.

Estos proyectos son un buen aliciente que se unen a los que normalmente tienen este tipo de empresas a nivel nacional e in-

Ilboc invertirá 28 millones en su parada de mantenimiento

La compañía para la producción de bases lubricantes ubicada en el Valle de Escombreras, junto al complejo industrial de Repsol, llevará a cabo después del verano una parada de mantenimiento, para revisar y modernizar sus instalaciones, en funcionamiento desde hace cuatro años. En los tra-

ternacional. Eso conlleva la creación de cientos de puestos de trabajo, aunque muchos de ellos tendrán que llegar de otras zonas de España, sobre todo de regiones del norte, e, incluso, de fuera del país. La falta de profesionales para hacer ciertos trabajos especializados les obliga a ello. Precisan soldadores, caldereros, mecánicos de motores navales y tuberías, principalmente.

Donde ya llevan una buena carga de trabajo es en los astilleros de Navantía. Gran parte de los trabajadores subcontratados son compartidos por las tres unidades de negocio (construcción naval, motores y reparaciones). En total, según fuentes del astillero, hay trabajando alrededor de medio centenar de empresas de estas características, con un total de un millar de obreros.

La mayoría de ellos están ocupados en las tareas de construc-

bajos, que se prolongarán durante algo más de un mes, está prevista la participación de 200 trabajadores de empresas auxiliares en momentos punta, en su mayoría locales, a los que habrá que sumar los empleados de Ilboc. La empresa participada por la multinacional española Repsol y la surcoreana SK, se dedica a la producción de bases lubricantes de última generación utilizados para la formulación de aceites para diversas aplicaciones.

ción de los tres submarinos que quedan pendientes de entregar a la Armada: el S-82 'Narciso Monturo', el S-83 'Cosme García' y el S-84 'Mateo García de los Reyes'.

Construcción del Coferdán

Entre ellas está Metalmecánicas Herjimar, una de las firmas más potentes del sector de la industria auxiliar del municipio. Lleva, según uno de los gestores de la empresa, Juan Antonio Ayala, contratos en las tres unidades. La primera de ellas en las secciones 1 y 2; en la segunda, en la 5; y en la tercera se encarga de la construcción del Coferdán, uno de los componentes más importantes del sumergible, una caja submarina construida para achi-car el agua con aire a fin de crear un entorno de trabajo en seco para llevar a cabo reparaciones submarinas. Solo esto supone la

EN SU CONTEXTO

50

empresas auxiliares, aproximadamente, son las que trabajan actualmente en las tres unidades de producción de Navantía. La mayoría de ellas, según el comité de empresa de la compañía, lo hacen en la construcción de los submarinos.

Falta de profesionales

La falta de profesionales para hacer ciertos trabajos especializados obliga a la mayoría de la industria auxiliar a echar mano de obreros de fuera de la comarca. Es un problema enquistado para el que ya se está poniendo remedio por parte de las administraciones.

18

cursos de formación imparte e impartirá la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) relacionados con el sector industrial. Se trata de programas consensuados con el sector empresarial y creados en base a las necesidades de este. Algunos comienzan en abril y otros en mayo y junio. Las clases se alargarán durante el segundo semestre de este año 2024.

mitad del trabajo que tienen ahora mismo en cartera. Esta firma, no solo está en Navantía, también le trabaja a la Autoridad Portuaria de Cartagena. Actualmente construyen una tolva ecológica doble para la carga de cereales en camiones.

Algunas de esas subcontratas también participarán en la parada de mantenimiento que prepara en sus instalaciones la hispano coreana Ilboc. Se trata de una revisión exhaustiva de sus unidades de producción puestas en marcha hace ahora cuatro años. Para ello, la multinacional ya está buscando a las empresas que desempeñen esos trabajos y esas, a su vez, precisarán de decenas de trabajadores. La inspección está prevista para después del verano y el coste y el tiempo que será empleado en ello aún no ha trascendido por parte de la compañía. En ella trabajará Mecánicas Bolea, con sede en Cabezo Beaza, como también lo está haciendo en la construcción de los sumergibles.

Una carga similar también tienen en Maessa, una empresa dedicada al mantenimiento industrial a nivel nacional con sede en Cartagena. Su encargado, Sergio Solano, cuenta que en Navantía se encargan de las soldaduras de las estructuras interiores de los submarinos, del montaje de equipos y de la ventilación y de realizar las pruebas a las tuberías. El principal problema con el que se encuentra es a la hora de «contratar a personas formadas en los trabajos que precisamos». «Necesitamos contratar a obreros pero, a veces, es complicado. Es mejor que tengan algo de experiencia y aquí los formamos», indicó Solano.